

ECONOMÍA



Román Escolano durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros que aprobó los PGE de 2018.

Román Escolano tiene una asignatura pendiente: la investigación en ciencia e innovación, castigada duramente por la crisis y que no levanta cabeza. Y aunque el ministro se niega a adoptar un discurso "catastrofista" cuando se habla de I+D+i porque supondría "tapar" los "grandes resulta-

dos" que cosecha la ciencia en nuestro país, es consciente de que, en el capítulo de créditos y préstamos, la ejecución es baja. Y es ahí donde quiere actuar Escolano para corregir los desequilibrios que supone para el sector dejar de utilizar el 50% de los fondos previstos en los PGE.

Revisará las ayudas y elevará los fondos no reembolsables, el tope para financiar proyectos y reducirá los avales para préstamos

Economía tiene un plan para relanzar la I+D+i

■ Ana Sánchez Arjona

Román Escolano se niega a adoptar un discurso "pesimista" y "catastrofista" cuando se habla de I+D+i y a la ciencia españolas porque hacerlo supondría "tapar" los "grandes resultados" que cosecha, "dando la imagen de que España es un país sin futuro para la ciencia". Sin embargo, los datos y las cifras son las que son y las que recogen los Presupuestos Generales del Estado. Los últimos ejecutados, los de 2017 reflejan que ha sido un ejercicio malo para la I+D+i en España. No solo se gastó poco, sino que el dinero disponible no se agotó. La ejecución presupuestaria, que mide el total del presupuesto gastado, no llegó ni al 30%, según los datos de la **Fundación Cotec** dirigida por la exministra de Ciencia **Cristina Garmendia**.

Sin embargo, la secretaria de Estado de I+D+i, **Carmen Vela**, se rebela "contra esas informaciones equívocas que dicen que hemos ejecutado sólo uno de cada tres euros de nuestro presupuesto. Es falso. Del capítulo 7 hemos ejecutado entre el 97% y el 99%", aseguró en la presentación de la jornada *Impulsando el ecosistema de innovación biomédica en España*.

Señaló además que otra cosa es el capítulo 8, que es dinero para "créditos y anticipos" para empresas y entidades que esperan conseguir luego financiación por otros caminos, pero tendrán que devolver el préstamo de dinero público. "Eso lo ejecutamos poco", reconoce Vela, que aun así asegura que "suman ambos capítulos y hacen una media, que tampoco es real, porque saldría más o menos uno de cada dos euros...".

Lo complejo de la explicación es que, según los datos que publica la Intervención General y ha interpretado Cotec, el volumen que los Presupuestos de 2017 destinan al capítulo de créditos, préstamos o anticipos a cuenta, como se los quiera llamar, es casi el doble que el dedicado a las

subvenciones. Y el presupuesto para créditos, como dice la secretaria de Estado, "se ejecuta poco".

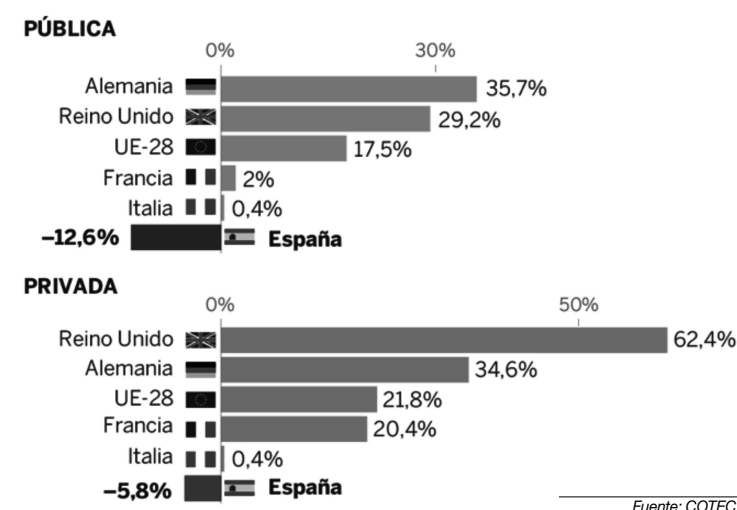
Y es ahí donde quiere meter

mano, el ministro de Economía porque sabe que tiene una asignatura pendiente. La partida de I+D ha sido una de las que más recortes ha sufrido

do con la crisis. Y no está mejorando ni siquiera con la recuperación económica. Todavía sin cerrar las cuentas de los organismos autónomos

INVERSIÓN EN I+D

Variación del gasto entre 2009 y 2016. (En Reino Unido, Francia y UE-28, entre 2009 y 2015)



Fuente: COTEC.

El gran problema no es la falta de dinero, dicen los investigadores, sino los obstáculos que suponen las leyes aprobadas por el Gobierno de Rajoy para controlar el gasto público

mos y las agencias estatales, este epígrafe podría haber quedado en 2017 en unas cotas parecidas a las de 2016, año en el que se dejó sin utilizar casi el 50% todo el presupuesto para el sector.

Todo parece indicar que se colocaría muy cerca de los 3.172 millones de hace un par de años y a mucha distancia de los 8.456 millones de hace nueve.

Para intentar encarrilar estos desequilibrios, la fórmula que tiene pen-

sado desarrollar Economía se basa primero en revisar todas las ayudas a la I+D, en concreto y especialmente, las destinadas a las empresas para incrementar la participación del sector privado, tal y como manifiesta el propio ministro. También se quiere activar un plan de empleo que prime los contratos fijos en relación a los temporales, es decir, dar mayor estabilidad laboral al sector. Economía también estudia la eliminación de la autorización previa de Hacienda en aquellos proyectos donde "la naturaleza de las actividades lo justifique".

Porque el gran problema del sistema no es la falta de dinero, dicen los investigadores, sino los obstáculos legales que provocan las leyes aprobadas por el Gobierno de **Rajoy** que tenían como objetivo controlar el gasto público y así poder cumplir con las exigencias de **Bruselas**.

Y aunque lo peor de la crisis ha pasado y las previsiones de crecimiento no pueden ser mejores, estamos a la cabeza de la UE con tres años de crecimiento económico continuado, esa legislación se sigue aplicando y no solo amenaza sino que está ahogando a los principales centros de investigación del país.

La intervención de Hacienda

En diciembre de 2014, el **Ministerio de Hacienda** aprobó una resolución que ordenaba la intervención previa de organismos públicos incluidos los de investigación. A cada centro llegaba un interventor de Hacienda para supervisar y aprobar los gastos. Según los científicos, esta medida deja al criterio de los funcionarios que no están en el día a día de los pormenores y singularidades de la investigación, determinadas evaluaciones lo que ha provocado un nivel extremo de lentitud del que se quejan los científicos y que se traduce en que los fondos asignados a la I+D+i, no se gastan.

En este sentido, la oposición ha adelantado en el Congreso su apoyo a la moción de Unidos Podemos que busca "simplificar" y "flexibilizar" la actividad científica en España, comenzando por la elaboración de un "análisis riguroso" de la baja ejecución presupuestaria en este sector y la reforma de los Organismos Públicos de Investigación (OPI).

Proponen reformar el sistema de centros públicos y de las actividades que realizan, incluyendo modificaciones legales para regresar al sistema de control financiero permanente, en sustitución de la actual función interventora.

Es decir, que la oposición ha pedido al Gobierno mayor flexibilidad en la actividad científica en España.

Los Presupuestos de 2018 recogerán un aumento de la inversión del 8,3%. Pero si tenemos en mente lo que paso con las cuentas del Estado de 2017, cuando se anunció un incremento del 4,1% para esta partida, una vez se examinaba la composición, se comprobaba que las subvenciones directas caían un 2,6%. En cambio, la dotación para créditos subía un 9,2%. Es decir, en realidad solo engordaba lo que se estaba dispuesto a prestar y que, además, ni siquiera se usa. El dinero directo, que es del que dependen los entes públicos de investigación, se volvía a recortar a pesar de la recuperación.

Precisamente el **Fondo Monetario Internacional** ha criticado a España que no brinde más ayudas directas. En su último informe anual sobre la economía española, la Comisión Europea también ha censurado la falta de financiación y apoyo público a estas políticas. Sobre todo señalaba "la baja, y disminuyendo, ejecución de los presupuestos de I+D".

El SOS de los dos grandes de la investigación

■ Aunque el Gobierno asegura que la inversión en I+D se encuentra en una "senda creciente", el presupuesto asignado a las dos agencias estatales principales en España (CSIC y Agencia Estatal de Investigación) y a los organismos autónomos más destacados no dice lo mismo. Con la salvedad del INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, la inversión en estas entidades —que alcanzó su cota máxima en 2009— se

ha reducido de forma significativa. El mayor organismo público de investigación en España es el CSIC. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es uno de los que más ha sufrido los hachazos presupuestarios de los últimos años, además de perder miles de empleos como consecuencia de los recortes. La entidad también padece una fuerte precariedad laboral y envejecimiento de su plantilla: según datos

de Comisiones Obreras el 75% de sus titulados superiores son temporales y la edad media de los trabajadores fijos es de 54 años. El buque insignia de la investigación biomédica en España es el Instituto de Salud Carlos III, cuya asignación presupuestaria también se ha reducido de forma significativa. Un grupo de científicos del Instituto de Salud Carlos, ha lanzado un manifiesto denunciando la

situación en la que se encuentran. Bajo el título *La ciencia se muere*, trescientos científicos —una tercera parte del personal, entre investigadores de plantilla e interinos— critican "las dificultades que sufren para desarrollar sus proyectos de investigación" y lanzan una advertencia. "Si no se adoptan medidas urgentes nos será imposible seguir realizando nuestro trabajo de manera eficaz..."